

No. 509
1ra. Semana
Agosto 2017
Año: XI
Cuarta Época

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE

Nuestro
TIEMPO

UNA PUBLICACIÓN DE NOLOGO GRUPO S.A. DE C.V.



El gobierno de los 100 años



Selene Hernández León
Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León

LDG. Fabiola Díaz Rosales
OM DISEÑO

Luis Enrique Sepulveda
Ilustración

Fotografía
Lluvia Ácida

Direcciones electrónicas
nuestro_tiempo2003@hotmail.com
nologo_news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotempotoluca.com.mx

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

Año X
No. 509
Primera Semana de Agosto del 2017
Es una publicación semanal editada por:
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Avenida Eulalia Peñaloza 132,
Col. Federal, CP 50120,
Toluca, Estado de México.
Tel: 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2013-060614490300-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermin Pulido Gómez en Metepec, Estado de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 232 7144. Este número se terminó de imprimir el 8 de Agosto del 2017 con un tiraje de 5 mil ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.



 @Nuestro_Tiempo

EN PORTADA

Crédito/ Miguel Alvarado.

Suscripción

FOLIO

POR UN AÑO: \$520.00 M.N
SEIS MESES: \$260.00 M.N

FECHA DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN:

FINAL DE SUSCRIPCIÓN: _____

A NOMBRE DE: _____

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CALLE: _____

COLONIA: _____

MUNICIPIO: _____

CÓDIGO POSTAL: _____

TELÉFONO: _____

SEMENARIO NUESTRO TIEMPO
EULALIA PEÑALOZA 132, COL. FEDERAL, TOLUCA, MÉX.
TEL.: 01722-197•74•23/ 044722•590 67 69
Juan Manuel Hernández / Ventas

R
E
S
S
D



.....
* "Yo, la verdad, estaba ahí afuera viendo, de verdad no lo sentí. Sí sentí una vez un temblor que nadie más sintió... muy pocos sintieron hace... no me acuerdo, pero fue allá en Los Pinos. Y solamente se sintió ahí, no sé qué pasó. Y éste no lo sentí porque estaba ahí caminando".
.....



El gobierno de los 100 años

Félix Santana Angeles

El sistema político-electoral mexicano está diseñado para evitar que las fuerzas opositoras reales asuman la titularidad del gobierno del Estado de México, pues de esta entidad emana la fuente del poder económico, empresarial, político e incluso espiritual que le da sustento. Esto garantiza, de entrada, el manejo casi discrecional más de 260 mil millones de pesos de presupuesto.

Perder la entidad mexiquense significaría el fin del binomio política-negocios iniciada por Isidro Fabela Alfaro en 1942, perfeccionado por Carlos Hank González y llevado a sus excesos más grotescos por Montiel, Peña y Eruviel. En su conjunto representa un modelo de “hacer política”, que se apropia del patrimonio público para uso personal y utiliza a las instituciones para garantizar la reproduc-

ción de sus inversiones, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas.

Para evitar cualquier riesgo contra su voracidad, han construido un complejo modelo electoral que transforma minorías electorales en mayorías gubernamentales, que sólo en el imaginario representan a la mayoría de la sociedad, por ejemplo en 1999, cuando Arturo Montiel asumió la gubernatura con un monumental fraude electoral que le llevó a comprar diputados panistas para tener el control del Congreso local, sólo el 10.8 por ciento de la población total lo respaldó en las urnas, pasando a la historia como el gobernador con la menor base social y mayor rechazo electoral. De asumir Alfredo del Mazo Maza la gubernatura mexiquense, lo hará con el apoyo del 11.8 por ciento de la población total, pues de los 17 millones 363 mil 387 mexiquenses que

según Conapo, vivimos actualmente en la entidad, sólo 2 millones votaron por él, es decir gobernará como todos sus predecesores, con una minoría.

No importan los presupuestos millonarios asignados desde el Estado para salvaguardar la democracia mexiquense, los 2 mil 228 millones de pesos destinados al Instituto Electoral del Estado de México o los 149 millones 80 mil 700 pesos al Tribunal Electoral del Estado de México, el problema no es presupuestal, sino estructural.

El sistema electoral actual asegura que sólo triunfen los candidatos que le garanticen la subsistencia del modelo, es decir, las elecciones sólo son la puerta de entrada para mantener el status quo o que las cosas no cambien, es impermeable a las transformaciones inter-

nas y externas y de sus características por excelencia es que el modelo no es democrático, sino profundamente autoritario.

La exigencia nacional de varios sectores “progresistas” frente a su complicidad disfrazada de incompetencia institucional, de que renuncien los Consejeros del Instituto Nacional Electoral y los Consejeros del IEEM, no acabará con el problema, ya que la defectuosa democracia procedimental sólo es un síntoma del profundo cáncer que padece nuestro país y actualmente está haciendo metástasis, infectando a todos los demás integrantes del Estado mexicano.

Para extirparlo, será necesaria una intervención mayor que arranque de raíz los intereses mafiosos convertidos en gobiernos constitucionales, que inicie una cruzada en contra de la corrupción de las instituciones gubernamentales y castigue de manera ejemplar a quienes se han enriquecido robando los recursos públicos. Será necesario enjuiciar y encarcelar a políticos corruptos, decomisar sus bienes y reconstruir el tejido social que durante décadas se encargaron de aniquilar para facilitar el saqueo.

Para algunos intelectuales como Edgardo Buscaglia, la primera gran transformación para iniciar nuestra recuperación es la reforma electoral con tres tipos de controles o, como

él le llama, auditorías patrimoniales, ciudadanas y de Estado, aplicadas desde las candidaturas; su lógica resulta interesante, pues asegura que no se puede esperar de un sistema electoral diseñado por las mafias, reformas judiciales en contra de ellas. Propone además que los consejeros integrantes del INE sean resultado de asambleas ciudadanas y no elegidos por los partidos o por el Estado.

A diferencia de Buscaglia, por quien siento gran admiración, cada vez estoy más convencido de que la transformación de nuestro país no vendrá de un sistema político-electoral reformado, atemperado por las estructuras partidarias actuales que se benefician de manera directa por acceder a su financiamiento, sino de una irrupción social, un levantamiento ciudadano que no permita ser conducido por los partidos actuales, sino por el contrario, que sean los partidos sólo instrumentos para la manifestación social mayoritaria.

Así se evitará lo que sucedió en el Estado de México el pasado 4 de junio del 2017, cuando la población votó mayoritariamente en contra del PRI y su candidato, pero la falta de talento, inteligencia política o estrategia electoral hicieron que una minoría, con el menor porcentaje de votación, una sola familia mantenga el control del gobierno por casi 100 años. **NT**



EL SUR,

entre la resistencia y el infierno

** El Acapulco glamoroso es también un embarcadero comercial, pero al mismo tiempo la segunda ciudad más violenta del mundo, con 143 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que lo ubica debajo del índice de San Pedro Sula, en Honduras.*

Félix Santana/
Francisco Cruz/
Miguel Alvarado

Para la mayoría de los guerrerenses el Cinturón de Oro es una maldición incomprensible que los divide profundamente, y aunque sólo el 10% del total de las concesiones mineras está trabajando, no hay futuro. O sí, pero es apocalíptico porque las extractoras mineras generan una tragedia colectiva que se refleja en todos los ámbitos.

El Acapulco glamoroso es también un embarcadero comercial, pero al mismo tiempo la segunda ciudad más violenta del mundo, con 143 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra que lo ubica debajo del índice de San Pedro Sula, en Honduras.

Y es precisamente en Acapulco donde el Cinturón se desvanece, pero la riqueza continúa porque las franjas de titanio y hierro lo atraviesan. La zona costera donde hay titanio está controlada por el narcotráfico. Petatlán y Acapulco son dominados por el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y el Del Pacífico Sur, pero también están Los Templarios, Los Granados, Los Carrillos y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Poblaciones vecinas a megaproyectos mineros sufren lo mismo que pueblos ubicados sobre

yacimientos de oro como Carrizalillo, pero las estadísticas oficiales encubren lo más cruento. Iguala, vecina de la extractora canadiense Torex Gold y de la Rey de Plata de Peñoles, tiene 771 homicidios desde 2011 y hasta enero de 2016, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que le contabiliza a Cocula 17 homicidios en el mismo lapso. Esos números no incorporan hallazgos de organizaciones como Los Otros Desaparecidos, creada el 8 de noviembre de 2014, y que a la fecha ha encontrado 430 muertos en cerros igualtecos, de los cuales el Estado reconoce 380 pero apenas identificó a 19. Las denuncias por asesinato en Guerrero representan solamente entre el 4 y el 6% de los totales reales.

Hasta 2015, en México desaparecieron 13 personas por día, el doble del sexenio de Calderón, que llegó a contar 26 mil 121 “personas no localizadas”, frase que acuñó la Secretaría de Gobernación para no decir lo que en realidad representaban.

En México ser activista es mortal cuando el país es una inmensa tumba clandestina. Entre junio de 2012 y mayo de 2014 fueron ejecutados 32 defensores de derechos humanos, y de 2011 a 2013, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT) registró

casos de ataques a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos con un total de 409 agresiones y 27 asesinatos, siendo Oaxaca y Guerrero los más afectados. En Guerrero, entre 2011 y 2014, al menos 13 líderes sociales fueron ejecutados.

Pero no fue en Guerrero sino en Oaxaca donde se organizó una de las resistencias más fuertes y estructuradas contra las mineras, que después se extendió a todo el país y a naciones como Perú, Chile y Honduras, aunque a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) le ha costado la vida de algunos de sus activistas, incluida la de su fundadora Alberta Bety Cariño Trujillo.

Ese camino de muerte que le tocó a Bety —poblana nacida en Chila de las Flores, egresada de la normal privada del Divino Pastor, en Tehuacán, y vinculada con las luchas de la Teología de la Liberación— fue disfrazado por el gobierno como un ataque paramilitar, aunque según activistas de derechos humanos debe acreditarse a una ejecución ordenada por empresas extractoras —“monstruo transnacional depredador”, las llamaba—, tal como señala Evelia Bahena García.

Hija de campesinos mixtecos, Bety pronto se

involucró en frentes y organizaciones como La Otra Campaña o la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP). Junto con su esposo, Omar Esparza, fundó el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y organizó la emblemática Rema.

El 27 de abril de 2010, seis camionetas con ayuda humanitaria se dirigían a San Juan Copala, en el municipio oaxaqueño de Juxtlahuaca, para entregar una dotación de víveres y cobijas. Veintiséis mexicanos, un finlandés, belgas y alemanes iban con ella para documentar lo que estaba pasando en ese pueblo triqui dividido que ya había visto a 700 familias indígenas escapar, ahuyentadas por acoso de paramilitares en 2009 y las 50 ejecuciones sin explicación que ensangrentaron al pueblo.

La pequeña comunidad de Copala, desde 2007 municipio autónomo, era escenario de una guerra intestina que empezó en los años 70 y se recrudeció en los 90 cuando desde el PRI se creó la Unidad y Bienestar Social en la Región Triqui (Ubisort), una organización paramilitar con varias unidades o grupos para sembrar terror y someter a los líderes que buscaban unificar a los pueblos de esa etnia y luchaban por la defensa de sus escasas tierras y la recuperación de otras, usurpadas para la siembra del café y el plátano, hasta llegar a la explotación minera.

Aquel 27 de abril, Bety debía pasar por el paraje Los Pinos, de La Sabana, en Copala. Ella, de 37 años, se encontraba a las 14:40 en las inmediaciones de la comunidad controlada por una unidad paramilitar de la Ubisort cuando su caravana, a la que había denominado “de paz y observación de los derechos humanos”, fue emboscada al momento de hacer maniobras para regresar porque la carretera estaba bloqueada.

Ya daban vuelta cuando desde los cerros comenzaron a disparar al menos 12 pistoleros vestidos con pantalón y botas militares, con la cara cubierta, que se acercaban sin aminorar el fuego. Buscaban a Omar, esposo de Bety. Algunos activistas de la caravana bajaron de las camionetas y echaron a correr, pero otros no pudieron. Los gatilleros los hicieron prisioneros, hincaron a algunos para interrogarlos y obligaron a otros a caminar por la montaña. Las ráfagas de los paramilitares apuntaron directo a las camionetas, donde estaban los que no pudieron correr. Allí quedaron dos muertos y cuatro heridos. Después se dio cuenta de cua-

tro desaparecidos. Los asesinados eran Bety y el observador finlandés Jyri Antero Jaakkola. A ella la mató un impacto de bala expansiva que le perforó la cabeza; a Jyri, dos tiros en la espalda y uno más en la parte izquierda del cráneo. Avisada del ataque, la policía estatal no movió un solo agente porque el gobierno no autorizó la intervención. Hasta el día siguiente llegó al poblado.

La creación de grupos paramilitares, su alianza con el priismo oaxaqueño y el reforzamiento de la presencia del Ejército tuvo un resultado previsible: escaló el nivel de violencia, además de una encarnizada persecución y cacería de líderes triqui. Los muertos se empezaron a contar siempre del lado indígena. Ni siquiera los niños se salvaron.

El conflicto en Copala, pueblo en estado de sitio permanente, ocultó acciones militares, policiacas y paramilitares de Ubisort que avanzaron discretamente por la Mixteca, la Costa y la Sierra Mazateca, incluso a través del reclutamiento de niños de 13 a 16 años de edad, quienes fueron entrenados para el combate y la represión.

Los niveles de violencia, así como la persecución y aniquilamiento de líderes, tuvieron su expresión más pública en el horror por los asesinatos de Bety y del activista finlandés Jyri. Estos crímenes develaron el motivo secreto de esa guerra unilateral para someter a los triquis que no aceptaban el liderazgo priista ni las políticas impuestas desde el Palacio de Gobierno del estado en la ciudad de Oaxaca: la riqueza mineral.

Los dos crímenes siguieron la ruta natural del asesinato de activistas en México: la impunidad, con sólo un detenido. Los homicidios fueron explicados desde la lógica más llana del gobierno que se apresuró a decir que Bety y su caravana se habían metido con los paramilitares.

Fundadora de Rema, Bety no era cualquier activista. Viajaba por todo el país, especialmente a poblados enfrentados con las mineras, y había conseguido organizar a comunidades de Oaxaca y Jalisco, entre otras; se mantenía la lucha en Chiapas y se consolidaba la de Guerrero en un frente único que se hacía cada vez más grande, como sucedió en San Luis Potosí, donde desde 2005 la canadiense New Gold posee la mina Cerro San Pedro y saca unas 400 mil onzas de oro por año o unos 9 mil 240 millones de pesos. **NT**

Un juez ordena a PGR investigar desaparición en San Fernando

** Durante 5 años la PGR engañó a una familia sobre una investigación que nunca realizó para dar con el paradero de los hermanos Román García, desaparecidos en Tamaulipas. En mayo un juez ordenó a la dependencia federal investigar, pero ésta se niega a hacerlo.*

Texto de Daniela Rea/
Foto de Pie de Página

En abril del 2011, cuando cerca de 200 cuerpos humanos fueron descubiertos en unas 43 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, Arturo Román acudió a la PGR y pidió que investigaran el paradero de sus hijos.

Un año antes, los jóvenes Arturo y Axel Román habían sido secuestrados por hombres armados y durante todo ese tiempo su padre no sabía de su paradero. Ellos volvían de un viaje de trabajo cuando pararon a cenar carnes asadas en San Fernando, donde fueron secuestrados. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no había hecho ninguna investigación.

En la PGR, específicamente en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tomaron nota de la denuncia del señor Román y en lugar de iniciar una Averiguación Previa por la desaparición de los jóvenes, iniciaron un Acta Circunstanciada, la 044/2011, sin aclararle al señor Román que ese documento era una especie de “acuse de recibo” y no el inicio de una investigación. Incluso, durante cinco años los funcionarios de SEIDO engañaron a la familia haciéndole creer que avanzaban en la investigación del paradero de sus hijos.

Todo lo anterior lo descubrió el señor Román

cuando con apoyo de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho -una organización de derechos humanos que representa a las víctimas de la masacre de 72 migrantes y a otras familias migrantes cuyos hijos han sido encontrados en las fosas de San Fernando-, peleó el expediente de la investigación de su caso.

“Nos nombramos representantes de la familia Román en el Acta Circunstanciada 044/2011 y solicitamos el expediente, SEIDO nos dice que no puede haber representantes porque no es investigación, que el señor Román no tiene calidad de víctima ante SEIDO y que como en esa AC se suman más víctimas –otras familias que reclamaron cotejar ADN de los cuerpos-, no puede dar copia del expediente”, explica Marisol Flores, abogada de la Fundación.

Por ese motivo el señor Román con la Fundación presentó el amparo 695/2016 contra el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR por su omisión de iniciar una investigación.

“Nosotros argumentamos que SEIDO debió iniciar una Averiguación Previa de oficio por el hecho de haber recibido una denuncia, porque el contexto decía que ya algo estaba pasando en San Fernando, Tamaulipas, y aun así no inició la investigación”.

En mayo de este año el juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió proteger a la familia Román y ordenar a la PGR a iniciar la investigación por la desaparición de los hermanos Arturo y Axel: “al haberse demostrado que los actos reclamados son inconstitucionales, dado que incumplieron con las garantías de seguridad jurídica y legalidad, procede a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a Arturo Román García para que el titular de la Unidad Especializada deje insubsistente el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIS/AC/044/2011 y ordene el inicio de la averiguación previa correspondiente.

”Por lo cual las autoridades responsables deberán observar y aplicar debidamente lo dispuesto en los artículos 14, 21, constitucionales; 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas; 2, 113 y 137 del Código Federal de Procedimientos Penales; y 4 de la Ley Orgánica de la PGR pues sólo de esa forma se restituirá al agraviado en el pleno ejercicio de los derechos de seguridad jurídica transgredidos”.

No conforme con la orden del Juez, la PGR se negó a iniciar la investigación y respondió con un recurso de revisión argumentando que no tiene competencia de investigar porque no es de competencia federal, el cual se resuelve-

rá en los próximos meses.

“La PGR mantiene una postura de no analizar el contexto de graves violaciones a derechos humanos y reniega de la orden del juez. Veremos en qué se resuelve”, dice Marisol Flores.

A la fecha, la PGR no ha investigado dónde está la camioneta en la que viajaban los hermanos Román García y que fue llevada por los hombres armados que los desaparecieron cuando cenaban carnes asadas en un restaurante afuera de San Fernando, Tamaulipas. La PGR tampoco ha investigado si hay o no relación con la masacre de 72 migrantes, pues la desaparición de los hermanos se dio dos días después del aquel crimen.

Para la Fundación es importante hacer un llamado a más familias que estén integradas en el Acta Circunstanciada 044/2011, aquellas que acudieron a denunciar la desaparición de sus familiares cuando el hallazgo de las fosas clandestinas, se sumen a la exigencia de que la PGR atraiga el caso e investigue, tramitando amparos.

“Este caso refleja que hay muchas familias que denunciaron la desaparición de un familiar y se les engañó con una supuesta investigación, por eso es importante que se sumen con amparos para obligar a la PGR a investigar”, señala la abogada Flores.

Siete años de búsqueda y siete años de impunidad

Este 25 de agosto se cumplen 7 años de la desaparición de los hermanos Arturo y Axel Román, en San Fernando, Tamaulipas. Desde entonces su familia emprende una batalla para que la investigación del paradero avance.

La noche del 25 de agosto del 2010 Arturo y Axel Román fueron desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas. Ellos volvían de un viaje de trabajo de MacAllen, a la Ciudad de México.

La última noticia que su familia tuvo de ellos fue a las 7 de la noche de ese día, cuando llamaron por teléfono para avisarles que habían parado a cenar carnes asadas en el lugar de siempre, el restaurante Don Pedro, y que al terminar continuarían su camino a la ciudad de México, a donde calculaban llegar por la madrugada.

Pero los jóvenes no llegaron. Al día siguiente, don Arturo voló a Reynosa, alquiló un automóvil y agarró carretera a San Fernando para buscar a sus hijos. En San Fernando no encontró policía, pero la gente del pueblo le recomendó ir a las cuatro funerarias que daban sus servicios al municipio, porque éste no tenía servicio forense. Ninguno de los cuerpos que tenían ahí eran sus hijos.

En estos años de búsqueda e investigación don Arturo ha podido reconstruir lo que sucedió:

Después de terminar la llamada con sus hijos, dos vehículos llegaron al restaurante, bajaron hombres armados y subieron a sus dos hijos. A uno lo subieron en una camioneta negra, a otro lo subieron en la cajuela de un auto gris, desde donde escribió un mensaje a un amigo.

“Nos acaban de secuestrar en San Fernando no hagas nada si llega a pasar algo solo avísale a mis papas gracias los kiero a mi me metieron a la cajuela no me marques ni nada”.

Los hombres armados se llevaron también la Grand Caravana donde viajaban los jóvenes Román y donde traían la mercancía que compraron para vender en México. En este viaje, además, cargaban ropa para el hijo que Arturo esperaba y que nacería cuatro meses después. Durante trece años Arturo viajó desde la Ciudad de México hasta Texas para comprar mercancía como ropa, tenis y patinetas, que después vendería en los tianguis de la capital. Y hasta el momento que él hacía sus viajes, San Fernando aún no era San Fernando.

El 25 de agosto del 2010, el mismo día que Arturo y su hermano Axel fueron desaparecidos, el resto del país se enteró de la existencia de este pueblo perdido en la frontera, por la masacre de 72 migrantes, ocurrida dos días antes, el 23 de agosto.

En San Fernando, don Arturo intentó poner una denuncia por la desaparición de sus hijos, pero el MP responsable, Roberto Jaime Suárez había sido secuestrado por un comando armado apenas inició la investigación por la masacre de 72 migrantes. Días después su cuerpo aparecería sin vida en la carretera San Fernando-México, junto al cadáver de Juan Carlos Suárez Sánchez, secretario de Seguridad Pública del municipio. Entonces don Arturo fue a Matamoros a poner la denuncia, pero las autoridades ministeriales de este lugar devolvieron el expediente a San Fernando, porque ahí sucedieron los hechos.

En abril del 2011, México se descubrieron decenas de fosas clandestinas con casi 200 cuerpos en su interior, en San Fernando. Don Arturo volvió a Tamaulipas para buscar a sus hijos entre los restos. Con astucia, consiguió que le enseñaran las fotografías de los cadáveres y durante horas, barajó cientos de imágenes tratando de reconocer los tatuajes de Arturo o los lunares de Axel. Cada fotografía que miraba, suspiraba agradecido por no reconocer en ese al cuerpo de sus hijos.

Desde entonces a la fecha don Arturo Román ha peleado por acceder al expediente judicial de la desaparición de sus hijos.





La historia del Dáesh no ha acabado

** Brett McGurk, enviado especial estadounidense de la “Coalición Internacional contra el Estado Islámico”, regresó recientemente a EE.UU. tras pasar unos días en la región y ha declarado con notoria confianza a la cadena de televisión CBS que “las fuerzas del Dáesh están luchando por sus vidas manzana a manzana” y que el grupo armado había perdido alrededor del 78 por ciento del área máxima que llegó a controlar en Irak y en torno al 58 por ciento de sus territorios en Siria.*

Ramzy Baroud/
Counterpunch/
Traducido del inglés para Rebelión
por Paco Muñoz de Bustillo.

La segunda ciudad de Irak, Mosul, ha quedado reducida a escombros. Por fin, tras meses de crueles bombardeos y una tremenda batalla por tierra, la coalición bélica liderada por Estados Unidos se la ha arrebatado al tristemente célebre Estado Islámico o Dáesh.

Pero difícilmente podemos hablar de “victoria” para calificar este momento. Mosul, la que fue joya cultural de Irak y modelo de coexistencia, es ahora una “ciudad de cadáveres” en palabras de un periodista extranjero que paseó entre sus ruinas mientras se protegía la nariz de la peste repugnante.

“Probablemente habrás oído hablar de los miles de muertos y del sufrimiento de los civiles —comentó Murad Gazdiev—, pero seguro que no has oído nada del olor. Del olor nauseabundo, repulsivo, que se extiende por todas partes: el olor de los cadáveres pudriéndose”.

En realidad, “el olor a cuerpos podridos” inunda todos los lugares donde el Dáesh ha sido derrotado. El grupo que llegó a declarar un califato (un Estado islámico) en Irak y en Siria en 2014 y al que se permitió expandirse libremente en todas direcciones ahora está cayendo a toda velocidad. Y ello nos lleva a preguntarnos cómo es posible que un pequeño grupo, a su vez procedente de otros grupos también tristemente célebres, puede haber declarado, expandido y sostenido durante años un “Estado” en una región plagada de ejércitos y milicias extranjeras y de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo.

Pero, ¿no debería resultar irrelevante esa pregunta ahora que el Dáesh ha sido derrotado mediante los métodos más enérgicos y violentos? Bueno, eso es algo en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo; incluso los adversarios políticos y militares coinciden abiertamente en este objetivo último.

Además de su derrota en Mosul, Irak, el Dáesh

ha perdido su baluarte del este de Siria, Al Raqa. Quienes asombrosamente han logrado sobrevivir a las batallas de Mosul y Al Raqa están ahora atrapados en Deir ez-Zor, donde se librará la que parece ser la gran batalla final.

En realidad, la guerra contra el Dáesh ya se está desplazando fuera de los grandes centros de población en los que se había refugiado el grupo armado. Y sus militantes también están siendo expulsados de sus escondrijos fuera de estas regiones, en la región de Qalamun occidental, frontera entre Siria y Líbano, por ejemplo.

Ni siquiera el desierto constituye ya un lugar seguro. El desierto de Badiya, que se extiende desde el centro de Siria a los límites con Irak y Jordania, está siendo escenario de duros combates alrededor de la ciudad de Al Suknah.

Brett McGurk, enviado especial estadounidense de la “Coalición Internacional contra el Esta-

do Islámico”, regresó recientemente a EE.UU. tras pasar unos días en la región y ha declarado con notoria confianza a la cadena de televisión CBS que “las fuerzas del Dáesh están luchando por sus vidas manzana a manzana” y que el grupo armado había perdido alrededor del 78 por ciento del área máxima que llegó a controlar en Irak y en torno al 58 por ciento de sus territorios en Siria.

Como era de esperar, los oficiales y los medios de comunicación estadounidenses hacen hincapié en los triunfos militares atribuidos a las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos e ignoran los demás, mientras la coalición liderada por los rusos hace lo propio.

Poniendo a un lado las numerosas tragedias humanitarias asociadas a estas victorias, ninguna de las partes implicadas ha asumido responsabilidad alguna por el ascenso del Dáesh. Sin embargo, es lo que les correspondería, y no solo por lo que conlleva de responsabilidad moral. Porque si no comprendemos y afrontamos las razones que explican la aparición del Dáesh, su caída dará lugar, con toda seguridad, a la creación de otro grupo con una visión igual de nefasta, desesperante y violenta.

Los medios de comunicación convencionales que han intentado deconstruir las raíces del Dáesh se fijan en sus influencias ideológicas sin prestar la menor atención a la realidad política que gestó al grupo.

Pero lo cierto es que el Dáesh, Al-Qaeda y cualquier grupo de este estilo suelen gestarse y revivir en lugares aquejados por la misma enfermedad crónica: un gobierno central débil, una invasión extranjera, una ocupación militar y terrorismo de Estado.

El terrorismo es el resultado de la brutalidad y la humillación, sea cual sea la causa, pero es más pronunciado cuando la causa es extranjera. Si todos estos factores no se abordan realmente, el terrorismo no tendrá fin.

Por tanto, no debe sorprender que el Dáesh cobrara vida y progresara en países como Irak, Siria, Libia y regiones como el desierto del Sinaí. Además, muchos de quienes respondieron a la llamada del Dáesh procedían de comunidades que habían sufrido la crueldad de los regímenes árabes inhumanos o el abandono, el odio y la marginación de las sociedades occidentales.

La razón por la que muchos se niegan a reconocer esa realidad –y luchan con uñas y dientes para desacreditar tal argumento– es que admitir su culpabilidad les haría responsables por la propia creación del terrorismo que dicen combatir.

Quienes tienen bastante con culpar al islam, una religión que contribuyó en gran medida al renacimiento cultural europeo, no lo hacen por simple ignorancia; muchos de ellos están guiados por planes siniestros. Pero su descabellada idea de culpar a la religión es tan estúpida como la imprecisa “guerra contra el terror” de George W. Bush. Los juicios desinformados solo sirven para prolongar el conflicto.

Además, los juicios generalizados nos impiden enfrentarnos a los vínculos específicos y evidentes entre, por ejemplo, el advenimiento de al Qaeda en Irak y la invasión estadounidense de dicho país; entre el ascenso de la rama sectaria de al Qaeda liderada por Abu Musab al-Zarqawi y la división sectaria de aquel país bajo el administrador estadounidense en Irak Paul Bremer y sus aliados en el gobierno de Bagdad, predominantemente chií.

Debería haber estado claro desde el principio que el Dáesh, por muy violento que sea, no era la causa sino uno de sus síntomas. Al fin y al cabo, el Dáesh solo tiene tres años mientras que la guerra y la ocupación extranjera de la región son muy anteriores a su génesis.

Aunque nos dijeron –el propio Dáesh, pero también los expertos de los medios de comunicación– que el Dáesh había

aparecido para quedarse, ahora resulta que dicho grupo no es más que una fase pasajera de un prolongado y feo montaje plagado de violencia y despojado de la moralidad y el coraje intelectual para examinar las verdaderas raíces de la violencia.

Probablemente la victoria sobre el Dáesh será efímera. Seguramente el grupo desarrollará una nueva estrategia de guerra o sufrirá una mutación aún mayor. La historia ya nos lo ha mostrado antes fenómenos semejantes.

También es probable que quienes orgullosamente se atribuyen el mérito de haber aniquilado sistemática y eficientemente al grupo –junto a ciudades enteras– no se detengan a pensar por un momento en qué deben cambiar para prevenir que un nuevo Dáesh tome el relevo.

Curiosamente, la “Coalición Internacional contra el Estado Islámico” parece contar con la potencia de fuego necesaria para convertir ciudades en ruinas, pero no con la sabiduría para entender que la violencia desenfrenada solo inspira más violencia y que el terrorismo de Estado, las intervenciones extranjeras y la humillación colectiva de naciones enteras son todos los ingredientes necesarios para comenzar el baño de sangre una y otra vez. **INT**

* *Ramzy Baroud es un columnista internacional y asesor de medios de comunicación que lleva más de veinte años escribiendo sobre Oriente Próximo. Autor de varios libros y fundador de PalestineChronicle.com. Su último libro es “My Father was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold History” (Mi padre fue un luchador por la libertad: la historia no contada de Gaza).*

* Fuente : <https://www.counterpunch.org/2017/08/31/the-terror-next-time-the-daesh-story-is-not-ending>

* *El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se cite a su autor, su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.*

¿Y los movimientos sociales?

* En el valle de Toluca nadie dice nada sobre la inseguridad, los feminicidios, los asaltos, los problemas del transporte, la falta de espacios educativos obligatorios, los problemas de los pueblos originarios y de los campesinos.

Miguel Martínez Hernández

Los movimientos sociales encuentran una gran difusión en las redes sociales, igual que las manifestaciones de grupos diversos en defensa de sus derechos, sus territorios, sus recursos o en reclamo por la solución de alguna demanda ante los distintos niveles de gobierno de cualquier lugar del país.

Todo ello indica que el país tiene una dinámica de reclamos, bajo una sola característica en cada movimiento. No están encausados por líderes políticos o sociales tradicionales, son los líderes locales espontáneos de las comunidades organizadas en defensa de alguna situación de origen circunstancial.

Importa mucho buscar una explicación del por qué no están ahí los líderes tradicionales que antes eran independientes y democráticos. Bueno, algunos se encuentran ocupando puestos de elección popular o están en la administración de cualquier nivel de gobierno y han mandado de vacaciones las luchas de clases, mientras que los problemas sociales se multiplican. En tanto, la clase obrera se encuentra pasiva, aceptando reformas laborales que atentan a sus derechos. Lo mismo pasa con las universidades. Esta actitud es entendible porque algunos de ellos son tapaderas de las acciones corruptas del gobierno federal. Los campesinos pobres y marginados, al parecer ya se cansaron de exigir mejoras al campo, los estudiantes rechazados son encausados arbitrariamente a escuelas lejanas. Los profesores del subsistema educativo estatal aceptan las

imposiciones de una evaluación punitiva sin que haya oposición. Además, con el aval del charrismo sindical se promueven cursos para que los maestros acrediten la supuesta evaluación.

¿Qué pasa?

¿Es acaso un indicador de lo bien que estamos en lo político, social, económico y cultural? ¿Por qué se han agotado los liderazgos independientes y democráticos?

En el valle de Toluca nadie dice nada sobre la inseguridad, los feminicidios, los asaltos, los problemas del transporte, la falta de espacios educativos obligatorios, los problemas de los pueblos originarios y de los campesinos.

Se puede inferir el siguiente criterio, sujeto a análisis y comentarios. Desde que los partidos de oposición obtienen puestos de elección popular a finales de los 70's, quienes ocupan estos puestos son los dirigentes de los partidos y los líderes sociales afiliados o identificados con los partidos de izquierda de aquel entonces. Los puestos fueron de todos los niveles, desde presidentes municipales, regidores, diputados locales, federales y senadores.

Los líderes ahora todo lo resuelven detrás del escritorio, burocratizando los movimientos sociales e interrumpiendo el proceso de concienciación de

la sociedad por las acciones mediáticas, para reivindicar sus demandas, mediante acuerdos con las instancias de gobierno que provocan soluciones mediáticas a las múltiples exigencias y los movimientos entran en un proceso de pasividad y conformismo y como resultado la disolución de las organizaciones sociales democráticas que sólo beneficia al gobierno.

Esta hipótesis obliga a reflexionar sobre el papel social de los distintos liderazgos en las diversas expresiones, también de las diferentes capas sociales. De manera concreta, en el valle de Toluca, se puede preguntar dónde están los cuadros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, dónde los cuadros destacados de los partidos de izquierda que dieron vida y crecimiento mediante la lucha social, dónde los dirigentes de la disidencia magisterial estatal que militaron en los partidos de izquierda, dónde los académicos universitario que impulsaron el sindicalismo independiente en nuestra máxima casa de estudios, dónde los dirigentes de grupos originarios. ¿O ya se conformaron con la creación de la Universidad Multicultural para mediatizar sus grandes demandas? Los señalamientos planteados obligan a una reflexión sobre los movimientos sociales y sus implicaciones políticas, consideradas como factor de cambio.

Finalmente, ¿dónde está la verdadera izquierda? ¿Acaso se ha vuelto como los rábanos, rojos por fuera y blancos por dentro?



Eruviel Ávila llama a cerrar filas en torno a la UAEM

* Al inaugurar el Ciclo Escolar 2017-2018 en la Universidad Autónoma del Estado de México, el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, entregó infraestructura con una inversión superior a los 55 millones de pesos; además, entregó las preseas "Ignacio Ramírez Calzada" e "Ignacio Manuel Altamirano Basilio".

* Coincidió con el rector Alfredo Barrera Baca en que la educación, y principalmente la superior, es una inversión en diversos sentidos, ya que la formación profesional redunda en múltiples beneficios personales, pero principalmente para la sociedad.

Toluca, México; 3 de agosto de 2017. Al inaugurar el Ciclo Escolar 2017-2018 en la Universidad Autónoma del Estado de México, el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, hizo un llamado a cerrar filas en torno a esta casa de estudios, que siempre, dijo, "está del lado de la ciudadanía".

En este evento, marco en el cual también entregó infraestructura con una inversión superior a los 55 millones de pesos, el titular del Ejecutivo mexiquense coincidió con el rector Alfredo Barrera Baca en que la educación, y principalmente la superior, es una inversión en diversos sentidos, ya que la formación profesional redunda en múltiples beneficios personales, pero principalmente para la sociedad.

En la Facultad de Odontología, donde entregó las preseas "Ignacio Ramírez Calzada" –mediante la cual se reconoce la contribución del personal académico a la docencia, la investigación y difusión cultural–, a los académicos Maricela del Carmen Osorio García y Carlos Manuel Arriaga Jordán, e "Ignacio Manuel Altamirano Basilio" –mediante la cual se distingue a los alumnos con la más destacada trayectoria académica de su generación–, a 101 alumnos de los niveles medio, superior y posgrado, Eruviel Ávila hizo un llamado a fortalecer el trabajo en equipo y reconoció la capacidad de gestión del rector Alfredo Barrera Baca.

Ante la secretaria de Educación estatal, Elizabeth Vilchis Pérez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, así como del presidente de la LIX Legislatura local, Vladimir Hernández Villegas, y la directora general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, Cristina Manzur Quiroga, el rector enfatizó que la educa-

ción superior de calidad es una inversión, ya que "el estado y la sociedad recuperan los recursos destinados a la formación universitaria cuando aumenta la productividad de los trabajadores, a partir de un mayor nivel educativo".

Afirmó que "lo mejor que le puede pasar en la vida a un joven es llegar a la escuela, llegar a la universidad, llegar a un lugar donde se le impulse a ser mejor persona y buscar lo mejor para sus semejantes" y, puntualizó, los profesionistas egresados de UAEM impactan de manera importante en el desarrollo económico y social de la entidad y el país.

En este evento, al que también asistieron el delegado de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de México, Adrián Torres Beceril, y el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, subrayó la confianza de los universitarios en la educación y en la universidad públicas, pues en ellas se adquiere la práctica del valor de la tolerancia, con la finalidad de vivir en una sociedad más abierta, libre y democrática.

En el marco de este evento, el gobernador Eruviel Ávila Villegas y el rector Alfredo Barrera Baca inauguraron la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Conducta, con una inversión de 12 millones de pesos; la remodelación y equipamiento del Edificio "B" del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, con una inversión de 8.5 millones de pesos; la construcción y equipamiento de la Clínica de Odontogeriatría y la ampliación de los edificios 1 y 2 de la Facultad de Odontología, que representaron una inversión de 19.7 millones de pesos, y la ampliación y equipamiento del Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED) y construcción del Laboratorio de Muestras de Sangre, con una inversión de 15 millones de pesos.

